

**Acuerdo de 30 de octubre de 2019 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el expediente de contratación del “Servicio de mantenimiento integral de equipos de electromedicina con destino al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda”. Expediente número GCASE 2019-8,**

Con fecha 17 de octubre de 2019 se ha recibido en este Tribunal escrito de D. Jose Ángel Arregui Rodriguez actuando en nombre y representación de la mercantil AGENOR MANTENIMIENTOS S.A. (en adelante, AGENOR ) contra el acuerdo de exclusión de la Mesa de Contratación del procedimiento referido, acaecido en 30 de septiembre.

A la licitación presentaron oferta dentro del plazo establecido las casas comerciales AGENOR MANTENIMIENTOS, S. A. e IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A. Esta última resultó adjudicataria del procedimiento, tal y como se publicó en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid en fecha 10 de octubre.

El recurrente en el escrito de interposición del recurso solicita que se acuerde la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación para que se anule su exclusión, consecuencia de no superar el umbral mínimo de 30 puntos sobre 60 de criterios objetivos de adjudicación, articulando diversos motivos contra la puntuación de su oferta en un extenso recurso de 112 folios.

En su escrito solicita la suspensión cautelar del procedimiento, alegando que concurren los requisitos legales necesarios para otorgar la suspensión. *“El órgano a quien corresponda la resolución del recurso debe, previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público, o a*



*terceros, la continuación del procedimiento, acordar la suspensión del mismo si aquella pudiera ocasionar perjuicios de imposible, o difícil, reparación.*

*A lo largo del presente escrito han quedado acreditadas diversas infracciones legales que no sólo aconsejan, sino que imponen la suspensión del procedimiento de adjudicación, máxime, cuando el propio interés general demanda la suspensión, pues es contraria al interés público la prosecución de un procedimiento que, pudiendo haber excluido a un licitador sin fundamento legal para ello, generara actuaciones y gastos para los potenciales licitadores, con las eventuales reclamaciones a que ello pueda dar lugar con posterioridad. En todo caso, la suspensión del procedimiento no genera perjuicio para el interés general, pues las necesidades de los pacientes quedan perfectamente cubiertas por la actual prestataria del servicio, y podrá seguir estándolo –pues la ley habilita para ello- hasta tanto se adjudique el expediente de contratación conforme con las exigencias legales.*

*Por todo ello, se impone la suspensión del expediente de contratación impugnado como una medida cautelar de necesaria adopción en aras a proteger tanto los intereses privados como el propio interés público en conflicto”.*

El órgano de contratación se opone a la suspensión, pero no alega nada en contrario.

En el caso presente se da la particularidad que por la tramitación de este procedimiento donde solamente existen dos licitadores la eventual estimación del recurso, podría hacer recaer sus efectos directamente sobre el adjudicatario, que todavía no ha sido oído en el expediente. En estas circunstancias la impugnación de la exclusión del recurrente, acuerdo adoptado con la aplicación de los criterios automáticos en la última Mesa, es simultánea y materialmente una impugnación de la adjudicación.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los



interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada. A este respecto no se ha alegado nada por el órgano de contratación.

Por otro lado el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que,



como en el presente, no se impugna la resolución de adjudicación, sino algún otro de los actos objeto del recurso, cuando el estado de la tramitación del expediente coloca al mismo en una situación similar, como se ha expuesto más arriba, siendo equivalente en el caso a la impugnación de la adjudicación publicada el 10 de octubre.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar, y con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados afectados y, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad,

### ACUERDA

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación y ulterior formalización del contrato del **“servicio de mantenimiento integral de equipos de electromedicina con destino al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda”**. - expediente número **GCASE 2019-8** hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

